

LA COLUMNA DE...



CATALINA BINDER
VICEPRESIDENTA DEL
CONSEJO DE POLÍTICAS
DE INFRAESTRUCTURA
(CPI)

Infraestructura y Cuenta Pública: entre avances y tareas pendientes

En su última Cuenta Pública, el Presidente Boric dedicó un espacio relevante a los avances en infraestructura, destacando obras que buscan mejorar la conectividad, el acceso a servicios y la calidad de vida de millones de chilenos. Sin embargo, aunque las cifras muestran señales de recuperación y dinamismo, la falta de una visión estratégica de largo plazo y de una institucionalidad moderna para el desarrollo de infraestructura sigue siendo una deuda estructural del Estado.

Uno de los anuncios más celebrados fue la extensión de la red de Metro, que se ampliará con nuevas líneas hacia el sur y el poniente, beneficiando a más de un millón de personas. Esta expansión representa un crecimiento del 22% de la red respecto a 2022, consolidando al Metro como el eje estructurante de la movilidad sustentable en la capital. A esto se suma la reactivación del tren de cercanía entre Santiago

y Valparaíso, una promesa largamente postergada.

En salud, se informó que 38 hospitales están en construcción y 58 más en etapa de diseño o licitación, lo que implica un aumento del 47% en la cartera hospitalaria activa en comparación con 2021. Esta expansión de infraestructura sanitaria se ha traducido en una inversión anual de US\$ 2.500 millones en 2024, un 18% superior a la de 2022.

Además, la inversión pública en infraestructura aumentó un 12% real durante 2024, reflejando un mayor dinamismo tras el estancamiento vivido durante la pandemia y el ciclo de ajuste fiscal posterior. Esto también ha impactado positivamente en el empleo: el sector construcción ha recuperado más de 100 mil puestos de trabajo desde su punto más bajo en 2022, según datos del INE.

Sin embargo, más allá de las cifras,

Aunque destacan logros en áreas como transporte y salud, respaldados por cifras significativas, persiste la carencia de una política de infraestructura de Estado sostenible, descentralizada y con foco en el largo plazo.

persisten desafíos estructurales. La planificación de infraestructura sigue siendo fragmentada y centralista. No hubo mención a una Estrategia Nacional de Infraestructura Sostenible ni a la creación de una entidad especializada que asegure continuidad técnica y visión de largo plazo, al margen del ciclo político. El país sigue

careciendo de una gobernanza robusta que priorice, evalúe y supervise grandes proyectos con criterios técnicos, ambientales y territoriales.

Tampoco se abordaron reformas al sistema de permisos ni la modernización de los mecanismos de contratación y modelos de gestión colaborativa, puntos clave para evitar sobrecostos, retrasos y conflictos recurrentes en la ejecución de obras públicas.

Finalmente, brilló por su ausencia una mirada integral sobre infraestructura resiliente frente a la crisis climática. En un año marcado por incendios, inundaciones y olas de calor, no se anunciaron nuevas políticas de adaptación territorial, inversiones en obras hidráulicas o infraestructura verde.

En resumen, la Cuenta Pública 2025 muestra avances concretos en transporte y salud, respaldados por cifras significativas, pero todavía falta una política

de infraestructura de Estado: sostenible, descentralizada y con foco en el largo plazo. La próxima administración tendrá la responsabilidad de consolidar este impulso, modernizar las capacidades institucionales y convertir a la infraestructura en un verdadero motor del desarrollo equitativo y resiliente del país.